

Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

I

El Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén rechazó, en lo que aquí interesa, el recurso de casación deducido por la defensa de Adrián Rodolfo Squillario y, en consecuencia, confirmó la condena impuesta por la Sala Penal de la Cámara en todos los fueros de la ciudad de Zapala, a cumplir dos años de prisión e inhabilitación especial por tres años para ejercer la profesión de abogado, procurador o letrado en leyes, por considerarlo autor del delito de estafa cometido en perjuicio de Marta Moya (fs. 2152/2184 y 2425/2448).

Contra ese pronunciamiento se interpuso recurso extraordinario, que fue concedido a fojas 2594/2599.

II

Atento la diversidad de agravios invocados por la asistencia técnica del encausado, considero conveniente abordar su análisis conforme fueron planteados en la extensa presentación de fojas 2465/2572.

A modo de introducción, los recurrentes atribuyen arbitrariedad al fallo, pues consideran que se ha realizado una evaluación fragmentaria y aislada de la prueba, sin considerar diversas cuestiones oportunamente propuestas y esenciales para la correcta solución del caso. Denuncian también la gravedad institucional que implicó la realización de diversos actos -tanto en la investigación preliminar llevada a cabo por la fiscalía como en la etapa de instrucción judicial- con el único propósito de condenar a Squillario y evitar su sobreseimiento, todo ello, en detrimento de los derechos y garantías constitucionales que invocan.

III

En primer término, refieren que se soslayó toda

consideración acerca de la invalidez de cierta prueba -listados de llamadas telefónicas con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado e informes de operaciones bancarias requeridas a distintas entidades financieras- al ser obtenida sin la correspondiente orden judicial por el doctor Hertzriken Velasco, como consecuencia de su irregular intervención como fiscal subrogante y juez de feria.

Sobre este aspecto, los recurrentes insisten en cuestionar la actuación del citado funcionario sin refutar adecuadamente las razones por las que el a quo desestimó ese planteo, a partir del análisis de diversas constancias que autorizaban a concluir que su desempeño en la causa fue exclusivamente como fiscal subrogante (confr. fojas 2429/2430, acápite 2ºA).

En efecto, la defensa reitera que ese desdoblamiento de roles se aprecia en los numerosos oficios y en las respuestas e informes brindados por diversos organismos que minuciosamente se encarga de detallar (fs. 2482/287), y señala en alguno de ellos el aprovechamiento de esa anomalía para solicitar la realización de ciertas diligencias que sólo podía autorizar un juez imparcial. Sin embargo, además de la respuesta que se brinda en el fallo a tal planteo, en el sentido que en todos los oficios se consignó claramente en qué carácter el doctor Hertzriken Velasco los rubricó, entiendo oportuno efectuar otras consideraciones que también conducen a desestimar la crítica ensayada.

Al respecto, cabe destacar que éste último, mientras se desempeñaba como fiscal subrogante en la investigación preliminar (art. 163 del Código Procesal Penal local), también fue designado como juez de feria de la circunscripción judicial de Chos Malal, conforme el régimen de subrogancia vigente en la provincia que no mereció impugnación alguna por

Procuración General de la Nación

la defensa.

Una minuciosa lectura de las actuaciones permite advertir que fue ésta la circunstancia que determinó el error en torno a precisar correctamente el carácter de su intervención en esta causa. Así, se aprecia que en el oficio de fojas 41, señalado por los recurrentes, se insertó el sello con el cargo permanente que Hertzriken Velasco desempeñaba -Defensor Oficial- sin reparar que éste lo rubricó en su calidad de fiscal subrogante, tal como claramente surge de su contenido. Ello motivó que en la respuesta que luce a fojas 57 se aludiera al primero de esos cargos, sin que ello autorice siquiera a inferir que dicho funcionario ejercía una doble función, incompatible, por otra parte, con el normal desarrollo de todo proceso penal.

Precisamente, en el orden de ideas expuesto, resulta lógico que tal situación no se haya presentado con motivo de la contestación brindada por el Registro de la Propiedad Automotor (fs. 31 y 158), al no incurrirse, en esta ocasión, en el error precedentemente indicado.

Sin perder de vista las particularidades señaladas, cabe también destacar que, contrariamente a lo sostenido por la defensa, la información solicitada en el oficio de fojas 131/132 fue dispuesta por el mismo funcionario en su calidad de fiscal subrogante durante la investigación preliminar, si se tiene en cuenta la fecha de la constancia de fojas 137 (punto 2), anterior a su necesaria excusación para intervenir en la causa como juez (fs. 125).

De igual forma, tampoco se aprecia irregularidad alguna en la actuación que luce a fojas 169 vta., ya que se incurre nuevamente en el mismo error al aludir al cargo del doctor Hertzriken Velasco, sin repararse que lo allí dispuesto constituye una reiteración de las medidas solicitadas por el

nombrado con anterioridad a su requerimiento de instrucción, conforme lo acredita el oficio de fojas 169.

Por lo tanto, debo concluir que además del defecto de fundamentación que contiene el remedio federal (Fallos: 307:2216; 315:59; 317:442; 323:3486), tampoco la crítica que los apelantes intentan en este sentido encuentra el debido respaldo en las constancias de la causa.

No paso por alto que, en sustancia, los recurrentes se agravan por la omisión en la que habría incurrido el a quo al no pronunciarse sobre la obtención de ciertas pruebas sin la correspondiente autorización judicial, cuya invalidez, más allá de la actuación que le cupo al citado funcionario, permitiría, de prosperar, la aplicación de la doctrina que invocan a tal efecto. Sin embargo, en la medida que la condena no se sustentó en esas constancias, no se alcanza a advertir la existencia de una relación directa e inmediata entre la cuestión federal que se intenta someter a conocimiento de V.E. y la resolución que se pretende impugnar (Fallos: 310:508; 311:504; 313:740), razón por la cual, también en este aspecto, el recurso extraordinario adolece del requisito de fundamentación suficiente que exige el artículo 15 de la ley 48.

IV

Los recurrentes incurren en igual defecto cuando aluden, en virtud del resultado negativo que arrojaron las diligencias ordenadas al inicio de la investigación, al desarrollo de diversos actos que consideran contrarios a derecho y tendientes demostrar que el imputado gastó más dinero del que percibió en su actividad profesional, para endilgarle, de esa forma, la comisión del delito que se le reprocha. Pienso que ello es así pues, ni la Cámara al condenar, ni el a quo al confirmar ese temperamento, tuvieron en cuenta alguna de esas

Procuración General de la Nación

circunstancias enumeradas en el apartado VI.2 del recurso extraordinario (fs. 2497vta./2506).

Más aún, muchas de las críticas allí expuestas constituyen una reflexión tardía (puntos a, c; d; e; f; g; i; j, de dicho apartado), pues su invocación de modo expreso resultaba previsible al momento de interponer el recurso de casación (Fallos: 302:194; 303:2091; 308:733; 310:2693; 312:2340; y 313:342).

Tampoco se alcanza a comprender ni demuestran los apelantes, cuál fue el perjuicio sufrido, o bien, cuáles fueron las defensas que se vieron imposibilitados de ejercer y en qué medida habría influido en la decisión adoptada, el requerimiento del fiscal subrogante de prohibir la vista al encausado de las constancias relativas al Mercado Abierto Electrónico y su irregular obtención e incorporación al proceso; la desaparición del segundo cuerpo de las actuaciones con información que demostraba que el imputado no había realizado ninguna operación bancaria que lo incrimine; la investigación paralela a la causa que supuestamente se mantuvo en secreto durante varios meses; la negativa del juzgado a las reiteradas audiencias solicitadas por Squillario para prestar declaración; así como también, el impedimento para producir diversas pruebas vinculadas con el reconocimiento de los convenios de "cuota litis" firmados por los denunciantes.

Cabe destacar, además, que respecto de las tres últimas circunstancias apuntadas, como de la inexacta incorporación al patrimonio del encausado de gastos ajenos que también invoca la defensa, no existe una crítica concreta de todos y cada uno de los argumentos en los que la decisión se apoyó (confr. fojas 2431/2432 y 2436), lo que configura también otro defecto de fundamentación insubsanable (Fallos: 303:620; 305:171; 306:1401; 307:1752; 311: 1695; 312:808,

entre muchos otros).

V

Asimismo, se califica de dogmática la convalidación por el a quo de la defectuosa motivación que se le atribuye a la sentencia condenatoria, como consecuencia de la transcripción por los jueces de argumentos desarrollados en otro proceso.

Sin embargo, una vez más, cabe advertir que la crítica que dirigen los recurrentes en este sentido apunta exclusivamente a demostrar la existencia de esa particularidad -admitida, incluso, en la decisión impugnada- sin rebatir los argumentos de naturaleza no federal en los que se sustenta la decisión para justificar tal proceder por la Cámara, aspecto que torna improcedente el recurso extraordinario (Fallos: 304:635; 307:142; 311:1695; 312:389; 317:430). En efecto, basta con advertir que la defensa, sin desconocer "...la posibilidad de aplicar criterios similares en uno u otro caso...", se limitó a insistir en que se llevó a cabo "...un copiado textual..." (fs. 2508 vta.), sin reparar que ello estuvo dirigido, ante la coincidencia con algunos juicios de valor efectuados en el citado antecedente -extremo que tampoco fue cuestionado- a sustentar la veracidad de la versión de la damnificada y sus familiares, corroborada por otras constancias acumuladas en la causa que fueron evaluadas por el tribunal de juicio y que, precisamente, conformaron el cuadro presuncional en el que se apoyó la condena.

Esa carencia de fundamentación impide vislumbrar el perjuicio que para el derecho de defensa pudo suscitar la transcripción literal de las reflexiones plasmadas en otro proceso y, menos aún, de qué forma ello pudo incidir para no ponderar ciertas circunstancias objetivas alegadas contra los testimonios de cargo, cuyo análisis, como seguidamente expon-

Procuración General de la Nación

dré, fue soslayado por motivos diferentes a los invocados en el recurso extraordinario.

VI

En efecto, la defensa también entiende que el fallo adolece de una decisiva carencia de motivación que impone un nuevo examen de la prueba, en la medida que los indicios invocados por la Cámara y por el Superior Tribunal provincial no fueron valorados conforme con las reglas impuestas por la sana crítica racional. Refiere, en este sentido, que carecen de ciertas características relevantes al ser equívocos, pues llevan a conclusiones diferentes y, además, tampoco son directos, toda vez que no conducen lógicamente al hecho objeto de investigación.

Los recurrentes califican de absurda la valoración de los testimonios de María del Carmen Sáez, Marta Rosana Moya, Patricia Moya y Luis Rodríguez, al no tener en cuenta las falsedades y contradicciones que permitirían demostrar el interés y la mendacidad en que incurren y, de esa forma, destruir la única evidencia directa en la que se sustentó la condena.

No cabe duda que en la medida que dichos agravios apuntan pura y exclusivamente a cuestionar la forma en que fue apreciado el hecho y las pruebas acumuladas en el proceso por parte del a quo para confirmar el temperamento adoptado por la Cámara, su análisis remite a temas cuya apreciación constituye, por regla, facultad propia de los jueces de la causa y ajena, por ende, a esta instancia de excepción (Fallos: 301:909; 308:718; 311:1950; 312:1311; 319:97, entre muchos otros). Es cierto que ello no impide que V.E. pueda conocer en determinados casos, cuyas particularidades permiten apartarse de ese principio con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se procura asegurar las

garantías de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 311:948 y 2547; 313:559; 315:29 y 321:1909).

Sin embargo, a mi modo de ver, la crítica que en este sentido intenta la defensa no puede prosperar, pues la decisión impugnada contiene fundamentos suficientes sustentados en las constancias de la causa y en las normas aplicables al sub judice que, por opinables que resulten, no alcanzan para su descalificación como acto jurisdiccional.

Arribo a tal conclusión, pues aquéllas falsedades y contradicciones que se alegan -vinculadas con el estado de analfabetismo de Marcos Moya y su esposa, María del Carmen Saez; con la defectuosa visión que ésta padecía a la época del suceso; con el grado de instrucción de Marta Moya; con la escasa luz artificial en el estudio jurídico del imputado al momento de entregar el dinero; con el pago a Squillario de un porcentaje del juicio en concepto de honorarios; con el conocimiento que tenían las denunciantes y su entorno familiar del monto aproximado que iban a cobrar; con la exhibición por el imputado de una fotocopia de la libranza por el monto total; con el recibo por honorarios suscripto por el encausado; con la no percepción por las denunciantes, durante aproximadamente cuatro años, de una considerable suma de dinero depositada en el juicio civil; con el maletín en el que fue entregado el dinero por el imputado; con el tiempo otorgado por éste a las denunciantes para que cuenten los billetes; con la forma ó composición en que los recibieron- carecen de incidencia en el razonamiento en virtud del cual la Cámara y luego el a quo, tuvieron por acreditado el delito atribuido a Squillario.

En este sentido y sin pasar por alto que los jueces

Procuración General de la Nación

no están obligados a tratar todos los argumentos utilizados por las partes, sino sólo aquéllos que estimen decisivos para la solución del caso (Fallos: 301:970; 303:135; 306:458; 307:951), cabe destacar que en el fallo en ningún momento se sostuvo que el encausado se valió para engañar a las víctimas de aquellas cualidades o aspectos personales que se encarga de resaltar la defensa. Por el contrario, con base en la opinión doctrinaria que cita a tal efecto, el vocal preopinante, para demostrar "...la atmósfera de alta vulnerabilidad respecto de las personas defraudadas...", destacó otras características particulares de las víctimas -gente sencilla, de campo- así como también la relación profesional que mantenían con el imputado, en quien depositaron la confianza para reclamar judicialmente los daños y perjuicios con motivo del accidente sufrido por Marta Rosana Moya. A su vez, las relacionó con ciertas circunstancias de tiempo y modo en que se produjo el pago (fs. 2437/2437vta.), que también difieren de aquéllas que se invocan en el remedio federal y de las que no se hicieron debidamente cargo los recurrentes, como las que se refieren a las altas horas de la noche en que se llevó a cabo la entrega del dinero; a la actitud del letrado de dispersar sobre la mesa gran cantidad de billetes sueltos y no en fajos como le fueron entregados en el banco, muchos de ellos de baja nominación que, según el tesorero que pagó la libranza judicial, obedeció a un pedido del propio encausado.

Por lo tanto, en ese contexto, la discusión que se pretende someter a decisión de V.E, acerca del conocimiento que con anterioridad al hecho tenían las damnificadas del monto total que iban a cobrar; de la exhibición por Squillario de una fotocopia de la libranza judicial; del recibo por honorarios firmado por éste y el tiempo que dispensó para que aquéllas contaran el dinero; de la cuestión vinculada con el

maletín en el que aquél se entregó, así como también de la inmutabilidad de la situación patrimonial de la familia Moya con posterioridad al suceso, deviene insustancial frente al razonamiento del a quo, sin que la defensa haya alcanzado a demostrar de qué forma esas circunstancias, de acuerdo con la interpretación que les asigna, pudieron incidir para variar la decisión que se intenta impugnar.

En consecuencia, no se percibe en el fallo una seria y decisiva carencia de fundamentación en cuanto a los motivos por los que se consideró acreditado el hecho y la culpabilidad del encausado, sin que las cuestiones planteadas por los recurrentes, por las razones expuestas, resulten suficientes para descalificar el temperamento adoptado por el a quo en estricto cumplimiento de la esencia de la prueba presuncional, cuya eficacia probatoria, vale la pena recordar, depende precisamente de la valoración en conjunto de todos los elementos del proceso que estimó decisivos para la solución del caso, teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia (Fallos: 311:948 y 2314). De ello se infiere que la queja de la defensa sólo conduce a aseverar un enfoque distinto en una materia no federal, reduciéndose su crítica a una mera discrepancia sobre aspectos de esa naturaleza, resueltos, insisto, con fundamentos suficientes como para excluir la tacha de arbitrariedad.

VII

Tampoco considero que pueden prosperar los agravios articulados por los apelantes en lo concerniente al monto y modalidad de la pena impuesta. Pienso que ello es así, pues en cuanto al primero de esos aspectos, la cuestión apunta exclusivamente a discutir las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal tenidas en cuenta por el tribunal para graduar la pena, asunto que en la medida que fue decidido dentro

S. 579. XXXIX.
Squillario, Adrián, Vázquez, Ernesto Marcelo
s/ defraudación especial en gdo. de
partícipe primario - Smoldi, Néstor Leandro
s/ defraudación especial en gdo. de
partícipe secundario.

Procuración General de la Nación

de los límites establecidos por las leyes respectivas, no habilita esta instancia de excepción (Fallos: 304:1626; 310:2844; 311:2619; 312:551; 315:807 y 324:4170). Por los demás y en este mismo orden de ideas, aprecio que el fallo contiene fundamentos suficientes con base en las constancias de la causa y en dichas normas que, por mínimos que resulten, no lo privan de validez.

Análoga situación se presenta, a mi modo de ver, en cuanto al alcance y aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 del citado cuerpo legal, toda vez que el planteo se reduce a disentir, a partir de la corriente doctrinaria que se cita, sobre la conveniencia de dejar en suspenso el cumplimiento de la condena impuesta a Squillario y la obligación de los jueces de la causa de invocar las razones por las cuales no ejercitaron esa facultad, aspectos que remiten a cuestiones de derecho común que, en la medida que fueron resueltas con argumentos de igual naturaleza, en especial, con base en la excepcionalidad del instituto, obstan su revisión en esta instancia extraordinaria (Fallos: 293:218; 304.1179; 310:2721).

VIII

Por todo lo expuesto, soy de la opinión que V.E. debe declarar improcedente el recurso extraordinario interpuesto a fojas 2464/2572.

Buenos Aires, 4 de febrero de 2005.

ES COPIA

EDUARDO EZEQUIEL CASAL

Buenos Aires, 8 de agosto de 2006.

Vistos los autos: "Squilaro, Adrián, Vázquez, Ernesto Marcelo s/ defraudación especial en gdo. de partícipe primario - Smoldi, Néstor Leandro s/ defraudación especial en gdo. de partícipe secundario".

Considerando:

1º) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Neuquén rechazó parcialmente el recurso de casación interpuesto a raíz del fallo de la Cámara de Apelaciones de Todos los Fueros de la ciudad de Zapala —Sala Penal— que había condenado como autor material y responsable del delito de estafa (art. 172 del Código Penal) a Adrián Rodolfo Squilaro a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado, procurador o letrado en leyes, por el término de tres años de cumplimiento efectivo y las costas del proceso.

Contra el fallo en cuestión se interpuso recurso extraordinario que fue concedido a fs. 2594/2599.

2º) Que al nombrado Squilaro se le imputó, en su condición de abogado de la parte actora en un juicio civil, haber abusado de la confianza de sus clientes apoderándose de una importante suma de dinero cobrada en concepto de resarcimiento por daños y perjuicios reclamados.

3º) Que esta Corte comparte los argumentos y conclusiones puestos de manifiesto en los capítulos III, IV, V y VI del dictamen del señor Procurador Fiscal, a los que cabe remitirse en razón de brevedad.

4º) Que, por el contrario, en orden a la fundamentación del monto de la pena y su ejecución, el recurso extraordinario resulta formalmente procedente toda vez que la sentencia impugnada reviste el carácter de definitiva, pro-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

viene del superior tribunal de la causa y pone fin al pleito. Por otra parte, los citados agravios suscitan cuestión federal suficiente pues se invoca la arbitrariedad del fallo en el tratamiento de tales cuestiones y la consiguiente vulneración de las garantías constitucionales derivadas del art. 18 de la Constitución Nacional, verificándose, finalmente, relación directa entre dicha causal y la resolución recurrida.

5°) Que si bien las decisiones relacionadas con la aplicación del monto de la pena resultan privativas de los jueces de mérito, cabe hacer excepción cuando, como en el caso, no se advierte una adecuada fundamentación respecto de tan trascendentes cuestiones, lo cual, descalifica al fallo como acto jurisdiccional válido.

En efecto, más allá de que los dos años de condena impuestos a Squilario por el tribunal de juicio se compadecen formalmente con la escala autorizada por la figura que reprime la conducta ilícita que se le reprocha, la mera enunciación genérica de las pautas objetivas y subjetivas que prescriben los arts. 40 y 41 del Código Penal para graduarla, desprovistas de toda relación y ponderación conjunta con los elementos que a tales fines fueron incorporados al juicio, sólo evidencia un fundamento aparente y colocan al pronunciamiento dentro de los estándares de la arbitrariedad de sentencia (Fallos: 315:1658 y 320:1463).

6°) Que idéntico vicio se constata cuando alude a su cumplimiento efectivo.

Es que si bien los jueces de la mayoría del fallo de casación argumentaron que sólo la aplicación de la condenación condicional debía ser fundada por ser la excepción a la pena de encierro (art. 26 del Código Penal), no es menos cierto que la opción inversa, en casos donde aquella hipótesis podría ser aplicada, también debe serlo, puesto que de otro modo

estaría privando a quien la sufre la posibilidad de conocer los pronósticos negativos que impiden otorgarle un trato más favorable.

En tales circunstancias, los condenados se verían impedidos de ejercer una adecuada defensa en juicio ante la imposibilidad de refutar decisiones basadas en criterios discrecionales de los magistrados que la disponen.

7°) Que, justamente, el instituto de la condenación condicional previsto en el art. 26 del Código Penal tiene por finalidad evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta tres años de prisión. Tal aserto encuentra explicación en la demostrada imposibilidad de alcanzar en tan breve lapso de prisión el fin de prevención especial positiva que informa el art. 18 de la Constitución Nacional.

8°) Que esta Corte ha sostenido en Fallos: 327:3816, que "...la condenación condicional procura evitar la pena corta de prisión para quien pueda ser un autor ocasional..." y que "...la razón por la cual la condena condicional se limita a la pena corta de prisión es porque el hecho no reviste mayor gravedad, lo que sucede cuando la pena no excede de cierto límite, o cuando no provoca mayor peligro de alarma social, es decir cuando el sujeto no es reincidente...".

9°) Que si bien surge del citado art. 26 de la ley de fondo el mandato expreso de fundamentar la condenación condicional, no por ello el magistrado deberá dejar de lado el mandato implícito que lo obliga —con el fin de asegurar una debida defensa en juicio— a dictar sus fallos en términos de una derivación razonada del derecho vigente conforme las constancias de la causa para resolver sobre una pena a cumplir

S. 579. XXXIX.
Squilario, Adrián, Vázquez, Ernesto Marcelo
s/ defraudación especial en gdo. de
partícipe primario - Smoldi, Néstor Leandro
s/ defraudación especial en gdo. de
partícipe secundario.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

en prisión.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara
procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el
fallo apelado con el alcance que resulta de la presente.
Vuelvan los autos al tribunal de origen para que por medio de
quien corresponda se dicte un nuevo fallo. Hágase saber y
remítase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I. HIGHTON de
NOLASCO - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - RICARDO
LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).

ES COPIA

DISI -/-

-//-DENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M.

ARGIBAY

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisibile (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se lo declara mal concedido. Hágase saber y devuélvase. CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Recurso extraordinario interpuesto por los Dres. **Rafael y Mariano Cúneo Libarona defensores de Adrián Rodolfo Squilario**

Traslado contestado por **la parte querellante**, representada por el Dr. **Rodolfo Rivarola** y patrocinada por el Dr. **Guillermo Rivarola**

Tribunal de origen: **Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén**

Tribunales que intervinieron con anterioridad: **Cámara de Apelaciones de Todos los Fueros de la ciudad de Zapala**